DIARIO

DE LAS

SESIONES DE CORTES.

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR SALVATO.

SESION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1822.

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior.

Se mandó insertar en el Acta de este dia el voto particular de los Sres. Romero, Flores Calderon, Serrano, Zulueta, Garmendia, Gonzalez Alonso, Ayllon y Ferrer (D. Joaquin), contrario á la resolucion de las Córtes de que no volviere á la comision la medida 9.^a propuesta por la misma, acerca del arresto de los conspiradores.

Se mandó pasar á dicha comision un oficio del jefe político de Barcelona, remitido por el Gobierno, acompañando la exposicion de aquella Diputacion provincial, en que pide se aprueben las medidas que ha adoptado para la defensa de la provincia.

A la propia comision pasó otro expediente, remitido tambien por el Gobierno, relativo á las providencias tomadas por el jefe político de la provincia de Gerona para impedir la emigracion á país extranjero.

Se leyó, y mandó dejar sobre la mesa para que el Sr. Presidente señalase el dia de su discusion, un dictámen de la comision de Marina resolviendo cierta con-

sulta del Gobierno, y opinando que éste pueda pagar á los empleados constantes de los arsenales al tiempo que lo hace á los individuos ocupados exclusivamente en el apresto y armamento de los buques, bajo el concepto de que se les incluya en la nómina del departamento, para reintegrar con la parte que debian percibir al fondo de construccion.

Habiéndose declarado comprendida en el art. 100 del Reglamento, y admitida á discusion, se mandó pasar á la comision especial que entiende en la propuesta de medidas para ocurrir á las necesidades de la Pátria, la siguiente proposicion del Sr. Gonzalez Alonso:

«Pido á las Córtes se sirvan acordar la suspension de las fórmulas que se previenen para los arrestos y detenciones en los artículos 287 y 290 de la Constitucion, así como la del 306 de la misma, respecto de delincuentes ó sospechosos en conspiraciones directas ó indirectas contra el sistema constitucional, y además el artículo 4.^o del decreto de 11 de Setiembre de 1820, adoptándose en seguida la proposicion del Sr. Romero.»

A la misma comision se mandaron pasar las que siguen:

Del Sr. Flores Calderon:

«Atendiendo á las circunstancias en que se encuen-

tra la Nación, y á que en su consecuencia es necesario proporcionar medios para atajar en su origen las intrigas de los conspiradores, pido á las Córtes se sirvan adicionar el decreto de 11 de Setiembre de 1820 desde su art. 4.º en los términos siguientes:

«Art. 4.º Esta detencion y custodia no es prision, ni podrá pasar á lo más del término de treinta dias en las sospechas de delito de conspiracion directa ó indirecta contra el sistema constitucional, y de veinticuatro horas en las de los demás delitos; ni la persona así detenida y custodiada deberá ser puesta en la cárcel, sino en la habitacion ó cuarto de detenidos, hasta que se cumplan los requisitos que exige el art. 287 de la Constitucion.

Art. 5.º Cuando por el Gobierno ó algun jefe político, en uso de las facultades que les conceden la Constitucion y las leyes, se entregase á las cuarenta y ocho ó veinticuatro horas algun arrestado al juez competente, éste procederá á formar brevemente la sumaria, deteniendo y custodiando al arrestado entre tanto, pero sin que pueda pasar la detencion y custodia del término prefijado en el artículo anterior.

Art. 6.º Los antecedentes que hayan motivado la sospecha pasarán originales al juez en el caso del artículo que antecede; pero el Gobierno ó jefe político se quedarán en testimoio con los que crean necesarios para continuar por sí tambien en la detencion de todos los demás que resulten ó puedan resultar sospechosos de estar en la conspiracion.

Art. 7.º Los jueces quedan responsables ante la ley si hubiesen procedido á la detencion sin algun antecedente ó motivo, por pequeño que sea; si por su morosidad dilataren la informacion sumaria, así como tambien si por falta de diligencia, y dejando pasar el término de treinta dias, pusieren en libertad á quien despues resultare culpable.»

Del Sr. Posadas:

«Toda persona, de cualquier clase, condicion, estado, calidad ó sexo, que de hecho, de palabra ó de cualquiera manera, directa ó indirectamente, atentare contra el sistema constitucional, podrá ser arrestada con arreglo á la excepcion de la restriccion undécima de la autoridad Real; y convencida que sea por documento fehaciente, testimonio fidedigno ó notoriedad pública, será entregada inmediatamente á la autoridad militar más próxima, para que ésta la juzgue, sentencie y ejecute militarmente en el término de tercero dia.»

Del Sr. Ayllon:

«Siendo llegado el caso previsto en el art. 308 de la Constitucion, de poner término á las maquinaciones de los partidarios del despotismo, atacándolas en su origen con la libre vigilancia del Gobierno y con el arresto de los delincuentes sin todas las formalidades que para él exige la ley fundamental, pido á las Córtes que atendiendo á la propuesta del Gobierno, se sirvan acordar las medidas siguientes:

1.º Los jefes políticos por sí, ó cuando el Gobierno se lo ordene, podrán allanar cualquiera casa y registrarla para descubrir la conspiracion de que se les hubiere dado noticia ó de que tuvieren algunas sospechas.

2.º Podrán igualmente arrestar á cualquiera sospechoso de conspiracion, siempre que para ello tuvieren algunos indicios; entregándole desde luego al poder judicial con los documentos y noticias que tuvieren, para la formacion de causa con arreglo á la Constitucion y á las leyes.

3.º Si en algun caso pareciere conveniente detener al sospechoso de conspiracion sin entregarle al juez hasta reunir otros datos que aseguren la averiguacion del presunto delito, podrá el Gobierno y los jefes políticos ponerlos en custodia en paraje seguro que no sea la cárcel; pero en ningun caso podrá pasar de treinta dias esta detencion sin poner al arrestado á disposicion del juez competente.

4.º El arrestado no podrá ser reducido á prision sino cuando por la informacion sumaria que recibirá el juez desde luego resulte la conspiracion y algunos indicios contra él, prévias las demás formalidades prescritas en la Constitucion; pero continuará en clase de detenido hasta definitiva, mientras no se desvanezcan las sospechas que contra él hubiere, aunque solo haya indicios de la existencia de la conspiracion.

5.º A fin de que el Gobierno y los jefes políticos no hallen obstáculo alguno para evitar las conspiraciones de que puedan tener noticia, queda á su prudencia el aprovechar los avisos con el menor vejámen posible de los sospechosos en el allanamiento de las casas sin sujecion á responsabilidad; pero de los arrestos para que se les autoriza, responderán con los datos que deben precederles segun el art. 2.º, y de la detencion segun el art. 3.º

6.º Ni el allanamiento de una casa, ni el arresto, siguiendo la soltura ó la absolucion en definitiva, perjudicarán á la buena fama y honor del que lo padeciere, ni podrá tachárseles por esto para deprimir su opinion de palabra ni por escrito, y el que lo hiciere incurrirá en la pena que para las injurias señala la primera parte del art. 699 del Código penal.»

Tambien se declaró comprendida en el art. 100 del Reglamento, y quedó aprobada, la proposicion que sigue, del Sr. Adan:

«Pido á las Córtes se sirvan acordar que el jefe de la redaccion presente traducido en la sesion de hoy el discurso pronunciado en la de ayer por el Sr. Secretario de Gracia y Justicia acerca del estado de la Nación, para en su vista pedir lo conveniente.»

Continuando la discusion de las medidas, se leyó la 10.ª, y dijo

El Sr. **SANTAFÉ**: A pesar de que he aprobado la mayor parte de las medidas que se han propuesto para remedio de los males que nos afligen, digo que no puedo en manera alguna aprobar esta medida 10.ª, porque á mi modo de ver es inútil, es insignificante y es nula. Es una medida de tal naturaleza, que no puede producir efecto alguno; y si le produce, será tal, que apenas podrá servir de consuelo á persona alguna: es una medida que al parecer hace mucho ruido, pero un ruido que no servirá para espantar al más mínimo de los facciosos. Es innegable, Señor, que cuando muchas personas contribuyen á la perpetracion de un delito de que se sigue perjuicio á un particular, ó á un pueblo, ó á una corporacion, son responsables á la satisfaccion de los daños que ha causado el delito, todos los que le han perpetrado; y es innegable tambien que cuando no se puede apurar fijamente quiénes son aquellos que más inmediatamente le han causado, todos mancomunadamente están obligados á su satisfaccion pecuniaria: y este es un principio tan cierto, que está sostenido por una moral natural, está sostenido por la moral evangélica, y está sostenido por los principios eternos de jus-

ticia, á que no pueden menos de mirar los que han de dictar las leyes para una sociedad en que se conocen los derechos de la propiedad. Si esto es así, parece que de necesidad debemos confesar que ya por las leyes que actualmente rigen entre nosotros, el sacrificado por los facciosos ó por los que conspiran contra el sistema tiene accion para reclamar contra ellos mancomunadamente.

Pregunto yo ahora: si en Sierra-Morena se forma una cuadrilla de ladrones, y esta cuadrilla se divide en varias porciones, y estas porciones se subdividen despues en otras, y todas conspiran al propio objeto, á causar unos mismos males, ¿no se dirá que todos los que componen estas cuadrillas mancomunadamente son responsables á satisfacer los daños y perjuicios que hubiesen causado? Es claro que se dirá que sí. Pues si éstos se encuentran ya por los principios ó por las disposiciones de nuestras leyes en el caso de deber responder mancomunadamente de todos los perjuicios y daños que causaren, y en este caso se encuentran todos los que conspiran contra el sistema constitucional, parece que por una consecuencia forzosa debemos confesar que no hay necesidad de esta medida. Esta medida podria ser útil si la comision la redactara de otra forma: si la comision no hablase de delito, sino precisamente de conspiracion contra el sistema, sin atenderse á delito ó no delito, entonces seria otra cosa; porque debemos tener presente que de diferente manera se califican los delitos en un tribunal, que se califican los daños y perjuicios causados á tercero. Para calificar á uno de delincuente se necesita mucha circunspeccion, porque se trata de su vida cuando el delito es de conspiracion; y para satisfacer los daños y perjuicios se necesitan pruebas, pero no tan robustas como para lo otro. Por eso yo creo que la comision no debiera hacer en esta medida más que limitarse á la conspiracion contra el sistema, porque puede haber caso en que se hagan ver los males, los daños, y tal vez no se pueda convencer á alguno del delito como corresponde para declararle delincuente conspirador. Yo entraria en la aprobacion de esta medida, siempre que la comision, como he dicho, no hablase en ella sino de conspiracion, de daños causados por los conspiradores; siempre que en seguida, despues de redactarla omitiendo las palabras *de delito*, dijese por consiguiente: «todos los facciosos, todos los que los sostienen, los que los dirigen y gobiernan dentro y fuera de España, son responsables á la satisfaccion mancomunada de los daños y perjuicios causados á los particulares, y que éstos acrediten haber sufrido.» Luego tambien debia decir que fuesen responsables á la Nacion de los daños y perjuicios que le han causado, diciendo qué daños son estos: por ejemplo, todo lo que ha consumido el ejército en la persecucion de los facciosos, porque esto es innegable que es un perjuicio que sufre la Nacion, y todos cuantos está sufriendo y sufra en adelante por causa de ellos, es decir, cuanto gaste en adelante por esta causa, y todas las contribuciones que no se cobran por la misma causa; y si se quiere, no tendré dificultad en que se diga que 3 ó 4.000 rs. por cada soldado de los que ahora se han decretado para el reemplazo del ejército, porque de todo son causa los facciosos. Si se propone así redactada la medida, entonces entraré en ella, añadiendo siempre algunas circunstancias que son precisas para que se haga efectiva. Por ejemplo, si despues de acordar la obligacion de satisfacer los daños en el modo y cantidades que he dicho, que es el único medio de hacerlos efectivos, pues el decir á bulto «vengan perjui-

cios,» eso es nada; digo, pues, que si despues de expresar en qué forma, ó de qué modo, ó qué daños son los que han de satisfacer los facciosos ó aquellos que conspiran contra el sistema, se dijese: «los jefes políticos procurarán averiguar inmediatamente qué personas son notadas de facciosas, ó de estar con los facciosos, ó de auxiliarios, ó dirigirlos y gobernarlos; qué bienes tienen estas personas, los que ocuparán inmediatamente, los inventariarán, los depositarán en poder de persona abonada para entregarlos á su tiempo á quien corresponda, es decir, á los mismos interesados, ó á quien se deba en virtud de lo que disponga la autoridad judicial;» si se dijese esto, y al propio tiempo que estos mismos jefes los llamarán por edictos perentorios, por término, v. gr., de quince ó veinte dias, bajo apercibimiento de que de no presentarse, sus bienes serán responsables á la satisfaccion mancomunada de los daños y perjuicios, y que efectivamente los jefes políticos tuviesen que fijar estos edictos y convocar á las expresadas personas, y mandar unir certificacion de ello al expediente de inventario de bienes de los notados por facciosos, y que lo pasasen al juez de primera instancia para que éste por medio del fiscal intentase el juicio competente para indemnizacion de los particulares comprendidos, y para la indemnizacion de los daños y perjuicios causados á la Nacion; si se hiciese esto, entonces la medida seria completa, porque podria producir efecto; pero del modo que propono la comision, es enteramente inútil. Yo bien veo que la comision me dirá que esto es objeto de una adicion; pero yo responderé que será objeto de una adicion siempre que la comision deje de hablar de delito, porque, repito, puede haber algun caso en que resulte perjuicio y no se pueda justificar el delito; y si no, lo dirá la compañía de ladrones de que he hablado al principio.

Un capataz de ladrones toma una porcion de efectos, sea para comer, sea para hacer la guerra, sea para vestuario ó para otros objetos: los toma prestados de una persona que se los entrega de buena fé y no sabia para qué objetos servirian; pero en realidad estos efectos han servido para sostener la cuadrilla de ladrones. Llega, en fin, á saberse esto, y se aprehenden los ladrones; preguntado yo: el que prestó al capataz de los ladrones, ¿no tendrá una accion civil para reclamar de ellos mancomunadamente el valor de aquellos efectos, si el que los tomó prestados no tiene para pagar? Es claro que sí. Pues este es el caso en que se pueden encontrar los facciosos. Por esto quisiera yo que la comision, caso de que se allane á admitir las indicaciones que he propuesto, dijera por medio de una adicion que sea con la circunstancia de que no se hable en la medida de delito, sino de conspiracion contra el sistema. Si hay necesidad de calificar esta conspiracion, ya se calificará; y si hay algun caso en que no se pueda calificar de tal, ó no convenga al interesado calificarla, porque lo que le interesa es el resarcimiento de sus perjuicios, no se le precise á la justificacion del delito. Digo más: la medida 10.^a no solo debe adoptarse en el modo que he indicado, sino que debia abrazar todavia más, para que tenga todo el complemento de que es susceptible. No puede negarse que los hijos de familia tienen un derecho sobre la herencia del padre, que nadie les puede disputar: por esto quisiera yo que se hiciese extensiva la medida á los bienes de los hijos de familia facciosos, para el caso en que mueran sus padres y tengan que heredarles, y que se declarase que debian considerarse como hijos vivos para heredarles aunque fallezcan ó ha-

yan fallecido entre los facciosos antes de la muerte de su padre, á fin de que no pudieran dejar nunca de existir para resarcir á los particulares damnificados y aun á la misma Nacion. Quisiera más: que supuesto que las leyes de Castilla son más estrechas que las de Aragon, Cataluña y Valencia, los padres en todas partes tuviesen que disponer de sus bienes con sujecion á ellas; pero únicamente en cuanto á esta parte correspondiente á sus hijos que están en los facciosos, dejándoles absoluta libertad para que conforme á los fueros que aún rigen en aquellas provincias, dispongan de sus restantes bienes. Si la comision se allana y adopta la medida como he indicado, la aprobaré: pero en el modo con que la concibe, no puedo aprobarla. Es preciso hacernos cargo de que la medida que aquí debemos decretar debe servir de consuelo á los damnificados, de correctivo á los que damnifican y de terror y espanto á los demás para que no se vayan con los facciosos. Si se adopta así la medida, producirá efecto; en otra forma, no. Por último, Señor, no puedo menos de decir que no puedo mirar con indiferencia que se estén aprovechando los facciosos y los que los gobiernan de los bienes que tienen entre nosotros, y al propio tiempo estén conspirando contra el sistema y destruyendo cuanto quieren. Por esto quisiera yo que la comision propusiese que los bienes de todos los facciosos, de todos los que los dirigen y de todos los que son marcados como tales, se ocuparan inmediatamente por las autoridades competentes, y que se declarasen depositados para aplicarlos á quien correspondiese. Esto es de absoluta necesidad: si no, no se hace nada, al menos en mi modo de pensar. Llevado de estas ideas, espero que la comision se sirva redactar el artículo en otros términos, porque como está no puedo aprobarle.

El Sr. OLIVER: Cuando pedí la palabra como individuo de la comision, fué con el objeto de contestar á las objeciones que por el señor preopinante se pusiesen, y á otras que, aunque no en este lugar, han llegado á mis oídos, de que este artículo estaba en oposicion con lo que prescribe la Constitucion; pero despues de haber oido al Sr. Santafé, veo que lejos de impugnar lo que la comision propone, lo confirma. En efecto, lo que la comision propone no está en contradiccion con las ideas del Sr. Santafé, y si pudiera asegurarse la comision de que las ideas del Congreso eran las mismas que las de dicho señor, no tendria inconveniente en redactar el artículo del modo que S. S. ha propuesto. La comision ha querido asegurarse de las bases, porque habiendo trabajado este dictámen en muy corto tiempo, no ha podido descender á formar reglamentos particulares: además de que para formarlos era indispensable tener aprobadas estas bases, para no exponerse á que su trabajo fuese inútil si despues no se aprobaban. Este artículo y la diferencia con el que propuso el Gobierno demuestran que estas son las ideas de la comision. El artículo del Gobierno dice: (*Le leyó.*) ¿Y qué dice la comision? No dice las causas, porque esto supone un proceso ya formado, sino el delito. Aquí conocerá el Sr. Santafé que la idea de la comision fué excusarse lo posible de este exámen prolijo, que él solo puede entorpecer toda la disposicion. Si se aprueba la medida, esto es, si se dice que los conspiradores han de sufrir la responsabilidad pecuniaria mancomunada, entonces la comision estará conforme en fijar reglas que digan el modo con que esta responsabilidad se ha de llevar á efecto. Dicho esto en contestacion á lo expuesto por el Sr. Santafé, no puedo menos de hacer algunas advertencias acerca de las ex-

presiones que han llegado á mis oídos, aunque, como dije antes, no en la discusion. Se ha indicado por algunos que puede esta medida estar en oposicion con el artículo 304 de la Constitucion; y por si á alguno ha hecho impresion esta idea, no debo omitir la respuesta. Hay una diferencia inmensa entre la pena de confiscacion y entre la indemnizacion. Es verdad que los efectos podrán ser iguales por una casualidad, porque los bienes del que haya de indemnizar no sean bastantes; pero en realidad será siempre una indemnizacion y no una confiscacion: de lo contrario, jamás podrían ocuparse los bienes de un fallido para resarcir las deudas que hubiese contraido, y jamás se ha creido confiscacion el acto de apoderarse de los bienes de otro cuando habiéndosele impuesto una multa no tiene lo suficiente para cubrirla.

Esta medida fué ya tomada por las Córtes generales y extraordinarias respecto de los que entouces estaban con los enemigos; medida que se ha conservado durante la Constitucion, lo cual prueba que no se le opone. Digo que se ha conservado durante la Constitucion, porque el decreto de 26 de Setiembre de 1820, por el que se permitió que volviesen á la Peninsula aquellos que se habian expatriado siguiendo los ejércitos del invasor, en uno de los artículos previno que se alzasen los secuestros que habian durado hasta aquel dia. Estas indemnizaciones no producen el efecto de las confiscaciones, porque se examinará hasta cuánto deben para completar la indemnizacion, y si sobrase se les devolverá. Además, los secuestros están autorizados por la misma Constitucion. (*Leyó el art. 294.*) Si la responsabilidad es grande, el embargo comprenderá todos los bienes.

La comision considera que este es el verdadero modo de cumplir con lo que previene el art. 4.º de la Constitucion, que dice: (*Le leyó.*) ¿Y cuál es el modo de proteger la propiedad y derechos legítimos de los que componen la Nacion? ¿Lo será consentir que los amigos de la libertad y de la Constitucion sean despojados por otros, y que estos otros queden libres de toda responsabilidad? La Nacion está en obligacion de decretar la indemnizacion, porque es de su cargo repeler las violencias de la fuerza armada y defender contra ella las usurpaciones de la propiedad. Además, está obligada á resarcir del modo posible la disminucion de ella que decreta por causa de la guerra, recargando á los ciudadanos con las contribuciones que tiene que imponer. Por último, Señor, las dificultades propuestas por el Sr. Santafé, lejos de contrariar el artículo, le confirman: la comision no está opuesta á estas ideas, y una vez que este artículo se apruebe, está pronta á admitir las adiciones que se presenten, dejando al Congreso que resuelva lo que crea más oportuno.

El Sr. SANTAFÉ: Para deshacer una equivocacion. El Sr. Oliver ha supuesto que yo he hablado de la indemnizacion como pena: no es así: por el contrario, la he considerado precisamente como accion civil, y no en otra forma. Por esta razon tambien, ni me ha ocurrido hablar de confiscacion de bienes, pues que es pena prohibida por la Constitucion; es una barrera que por donde pasa todo lo arrebatada, y la ocupacion de bienes de que yo he hablado solo puede arrebatarse lo necesario para la indemnizacion.

El Sr. LAPUERTA: El art. 10 presentado por el Gobierno no ofrece tantas dificultades como el que la comision ha redactado en su dictámen. Dice ésta que el delito de conspiracion lleva consigo la responsabili-

dad pecuniaria para resarcir los daños que los facciosos hubiesen causado. Esto, dicho así, no es una cosa nueva, sino marcada ya por la ley natural y justicia eterna, porque las leyes tienen decretada ya la indemnización de los daños y perjuicios que por culpa de uno se causen á otros, conservando á éstos expeditos sus derechos y marcándoles los medios para hacerlos valer, y por consiguiente veo ser como ociosa tal medida; pero tratándose, no como propone el Gobierno, sino como la comision dice, en la presente medida, de que no solo se indemnice á los amantes de la Constitución, sino también á la Nación, los efectos de esta indemnización serán ilusorios, nulos y equivalentes, idénticos á una confiscación reprobada por nuestras leyes fundamentales con arreglo á los antiguos fueros de Aragón, tan saludables á la conservación de las propiedades, como acredita su permanencia y observancia por tantos siglos. Esta confiscación, como ha dicho el Sr. Santafé, es una red barredera que todo lo arrastra: ¿y qué hará una indemnización, no solo de los daños causados á los particulares, sino á la Nación? Precisamente ha de empezar por reunir en manos de la Nación todos los bienes de todos los que se reputen facciosos; mas para esto debía preceder declaración de ser tales, operación que ha de hacer ilusoria esta medida. Yo no me opongo á que estos hijos desnaturalizados de la Pátria sean castigados con la severidad que merece su crimen; pero este modo de castigar me parece horroroso por la sencillísima razón de castigar á los habientes-derecho del que solo merece serlo, siendo él solo el delincuente. Esta medida se debe considerar en cuanto castiga á los que han damnificado á otros, y tienen que indemnizarlos, y en cuanto privará de los bienes que legítimamente les correspondían, á sus hijos y sucesores, de los cuales se les priva, haciendo extensivo á ellos el castigo sin haber cometido delito alguno: llámese castigo, llámese privación, llámese como se quiera, los bienes que no han desmerecido por su conducta no llegan á sus manos. Este principio es contrario á nuestra ley fundamental, que asegura que los delitos de los padres no serán transmisibles á los hijos; y me glorío de pertenecer á una provincia cuyas leyes y fueros se puede asegurar que son los más antiguos y los más liberales, y establecen este principio, de donde nuestra ley fundamental le ha tomado, como otras muchas cosas. Supongamos, Señor, que al delincuente ó conspirador contra la Constitución se le imponga justamente la pena que su delito merece; pero ¿será justo que se envuelva en este castigo al hijo, que podrá ser un amante de la Constitución? Los efectos, pues, de esta medida, si los hay ó no son nulos, son el castigo de un inocente que puede ser amante de la Constitución. ¿Y quién gradúa esta última calidad? ¿Es el mismo interesado, es la que se llama voz pública, que puede no serlo, ó se establecerá un tribunal para juzgar y graduar este amor? Cada uno de estos extremos ofrece grandes dificultades. Además, las leyes han impuesto la última pena, que es la de la pérdida de la vida á los conspiradores, ¿y podemos creer que aquel á quien esta pena no contenga, podrá contener y desviar de cometer tal delito la pérdida de sus bienes? El que no hace ningún caso de la pérdida de su propia vida, ¿podrá ser sensible á la pérdida que los hijos van á tener de sus bienes? No señor: yo estoy bien persuadido de que esta medida no obrará por esta parte los efectos que de ella se esperan, sino ningunos ó contrarios.

Propone esta medida, no solo una indemnización á

los amantes de la Constitución, sino á la Nación. Esto es demasiado é imposible: es necesario para justificar una ley penal que tenga alguna razón más que su conveniencia; es necesario consultar á la necesidad y posibilidad; es necesario, ya que todas las leyes son restrictivas de la libertad, que se busquen aquellas que menos la restringen, y castigando y aun evitando los delitos, buscar las que produzcan mejores y más seguros efectos con menos inconveniente. Si se trata de castigar á uno por un delito, ¿no es bastante pena la de la vida? Pues ¿por qué extenderla á todos sus bienes bajo el pretexto de indemnizar de los daños causados á la Nación? ¿Bastarán todos los bienes de todos los facciosos para indemnizarla de los males que la han causado y causan? No señor. Podrán acaso indemnizarse los causados á los particulares, siempre que justifiquen haber sido damnificados ante la ley, extremo más fácil de probarse que el de ser amantes verdaderos de la Constitución; pero ¿cómo podrán alcanzar para todos los de la Nación? De consiguiente, es evidentemente cierto que aprobada esta medida será en los efectos una confiscación verdadera la que se hará á los facciosos. Además, yo veo una gran dificultad para poder hacer esta indemnización, no solo á la Nación, sino ni aun á los particulares; porque ¿quién es el que ha de hacer esta graduación de daños? Podrá calcularse el valor perdido en una casa quemada, en un campo talado ó en algunos efectos robados; pero y qué, ¿no han padecido otros daños, cuyo cálculo es imposible de hacer ni por las autoridades, ni por los interesados, ni por los peritos que se quieran nombrar al efecto?

Ningun legislador justo debe confundir en las penas á los inocentes con los criminales. Si adoptamos esta medida, aunque con el mejor celo por la Pátria, vamos á sumir en la miseria á una porción de familias, y á cubrir de lágrimas y llanto para siempre á una infinidad de inocentes, y quizá á que lleven estos sentimientos hasta el extremo de efectos incalculables, de la desesperación. Ultimamente, Señor, yo creo que teniendo los damnificados expedito el camino de pedir la indemnización de sus perjuicios, debe solo reducirse la medida á esta parte, omitiendo la otra de indemnizar los daños causados á la Nación. Así la ha propuesto el Gobierno, y así será el medio más á propósito para impedir grandes inconvenientes, quizá arbitrariedades, muchas lágrimas inocentes, y que la desesperación lleve á muchos á aumentar el número de los facciosos, sin que por ella se consiga retraer á los criminales, porque como he dicho, á quien no contiene el temor de perder su vida, menos contendrá la pérdida de los bienes. Por todas estas razones, y por otras que omito por evitar difusión, yo creo que en caso de ser esta medida absolutamente necesaria, y no en otro, se proponga y adopte en los términos que acabo de exponer.

El Sr. FUENTES DEL RIO: Tomo la palabra en defensa de la medida que se discute, la cual dice: (*La ley.*) Hablaré primeramente de la responsabilidad pecuniaria; segundo, de la mancomunidad; y tercero, de la indemnización propuesta, y haré algunas observaciones acerca del modo con que podrá llevarse á debido cumplimiento esta medida. El Sr. Santafé conoce muy bien que por razón de la cosa inocentemente recibida se restituye civilmente, pero por la injusta acción se trata en los juicios criminales. De estos habla la medida 10.ª que propone la comision, que no debe ser impugnada. La responsabilidad pecuniaria es una obligación de resarcir los daños causados por un delito; obligación indis-

pensable é impresa indeleblemente en el corazon del hombre por las leyes invariables de la naturaleza y de la justicia. Contra esto nada se puede oponer, ni puede ser impugnado, ni abolido, ni derogado por ninguna Constitucion ni establecimiedto humano. Los hombres y Naciones todos deben obedecer á Dios, autor y supremo legislador de toda sociedad. Por esto la Constitucion en su art. 294 habla de delitos que llevan consigo una responsabilidad pecuniaria. Esto es una cosa tan clara, que pareceria supérfluo que la medida dijera «se declara,» y detenerse en ello, si no fuera por la necesidad de advertir á muchos empapados en formularios forenses y rutineros, que parece tienen los oidos tapados, ó se han hecho sordos para no escuchar la voz de la ley de la naturaleza y de la divina; pero es preciso enseñarles lo que han afectado y no podido ni debido ignorar. Sentado este principio incontestable de la responsabilidad pecuniaria, paso á decir algo acerca de la mancomunidad. Todos aquellos que se reúnen para causar daños y perjuicios contra otros y complacerse en ellos, justo es que los reunamos para resarcirlos y restituirlos. Yo no me contento con que aquí se diga solamente «responsabilidad pecuniaria mancomunada,» sino que se diga que esta mancomunidad ha de ser *in solidum*, es decir, que todos y cada uno de los facciosos, y todas y cada una de las partidas, están en obligacion de resarcir los daños que por sí ó por los otros se hubieren causado. Señor, las leyes de la naturaleza están muy claras: lo que está muy oscuro y tenebroso es el corazon de muchos de los que las han de ejecutar. Ninguno ha sido resarcido por los jueces, que yo sepa. Acerca de la indemnizacion, digo que el efectivo resarcimiento y restitucion de los daños causados no es un castigo, no es una pena, es solo el cumplimiento de una ley, de un deber natural que obliga á todos, á pesar de cualquiera ley humana que en contrario pudiera establecerse. Este mismo deber, recordado por una ley, puede obrar bienes, no solo respecto de los que han de ser indemnizados, sino tambien previniendo muchos delitos. Porque, dígase lo que se quiera, el hombre que sabe que por una accion suya va á sumir en la miseria á sus hijos y familia, aunque tenga ánimo para despreciar la pena de muerte que ve muy lejos, no es creible que pueda despreciar esta restitucion que la ve presente; y estoy seguro que si esta medida se hubiera tomado en el principio, y con mancomunidad solidaria se hubieran aplicado las haciendas de los facciosos y sus fautores para indemnizar, se hubiera ahogado la serpiente en la cuna, porque al principio se curan mejor los males, y el incendio se hubiera cortado, ó al menos no hubiera sido tan general, ni hubiera tomado tanto cuerpo la canalla insurgente. No soy sanguinario; vivan enhorabuena los facciosos; nada de muerte hablo; pero queden sin dinero y sin hacienda, para que restituyan, y no dañen más. Dice el artículo que deberá indemnizarse á la Nacion. Pues si la Nacion es perjudicada, ¿por qué no se la ha de indemnizar? Si los facciosos y fautores que tienen hacienda ó bienes no son compelidos á restituir, en este caso tendríamos que ponernos á escribir un catálogo de los privilegios de los facciosos. Un defecto hallo yo en esta medida, y es, que solo se dice que serán indemnizados los amantes de la ley fundamental que sean perjudicados. Es necesario advertir que además de las dudas que deberá producir esta cláusula, resultará que no serán indemnizados los que estén en la clase de aquellos que ni la aman ni la aborrecen: ¿y estos no deberán ser comprendidos en la indemnizacion? Un niño

pequeño, un fátuo, un loco, unas viejas caducas, ni aman ni aborrecen la ley fundamental; pero si son perjudicados deben ser indemnizados. Segun mis principios, no solo los amantes de la Constitucion, sino un servil pacífico, un moro de los que vienen á vender dátiles y pañuelos, que padezcan daños por los facciosos, deben ser indemnizados: ni la religion ni la ley natural dictan que sean estos privados del resarcimiento que se les debe hacer por sus pérdidas; son nuestros prójimos. Y no haya jueces tan materiales que quieran un juicio prolijo y costoso, ni antes de decretar la indemnizacion se exija que el damnificado pruebe que es amante de la ley fundamental. Hallo tambien que aquí se antepone la indemnizacion de la Nacion á los particulares, y yo creo que estos debian ser los primeros, porque siendo los inmediatamente perjudicados, deben ser inmediatamente resarcidos.

En cuanto á la observacion que se ha hecho confundiendo esta indemnizacion con la confiscacion, no es del caso, y diré que el art. 304 de la Constitucion dice clara y terminantemente: «Tampoco se impondrá la pena de confiscacion de bienes.» La indemnizacion no es una pena; es el cumplimiento de un deber, de una obligacion impuesta por la naturaleza y por Dios, no una pena. La indemnizacion no es confiscacion. La confiscacion es una pena por la que los Gobiernos despóticos aplican los bienes de un criminal ó no criminal al fisco; y en este concepto, con la mayor prudencia y justicia prohibieron los autores de la Constitucion esta pena. La causa del fisco no es buena sino bajo un mal Príncipe. Pero ¿cómo podrian impedir la indemnizacion? Ya manifestaron antes, en el art. 294, cuáles eran sus ideas acerca de este punto. Un administrador de una aduana roba á la Nacion 20.000 pesos y puede por algun tiempo ocultar este robo; en seguida viene á peor fortuna y se descubre el robo; no tiene suficiente, y se le ocupan todos sus bienes: ¿será esto confiscacion? No señor; será tratar de indemnizar, de resarcir lo que habia robado, aunque en cuanto á los efectos se parezca á la confiscacion; no se confundan las voces, y no habrá confusion de las cosas. Señor, que sus hijos quedarán en la miseria; que se va á sumergir en llanto una porcion de familias. Estas son reflexiones que deberia hacer el que robó ó causó perjuicios, antes de cometer el crimen. Se tiene compasion de los hijos de los facciosos. Haya compasion y justicia con los hijos de los habitantes pacíficos, y nadie piense que es compasion retener lo ajeno ó no resarcir. Además, ¿se opone al art. 304 de la Constitucion la práctica general de imponer multas á los delincuentes? ¿No se les obliga á pagarlas, aunque sea necesario venderles todos sus bienes? Pues ¿quién ha reclamado hasta ahora contra esta práctica pretestando el artículo 304 de la Constitucion? Aún hay más: ¿no vemos que muchas de estas multas se imponen porque se hayan cometido solo algunas informalidades que tienen más de ridículo que de peso, más de ignorancia y olvido que de malicia? Pues ¿á qué ahora tanto escrupulo y detenimiento con los facciosos? Yo me acuerdo de que en este sitio dije una noche, cuando se propuso que las casas destruidas por los facciosos fuesen reedificadas por el vecindario, que no lo estimaba justo, porque no fué el vecindario el que las incendió: dije que la sana razon y la justicia exigian que estos daños fueran resarcidos de los bienes de los facciosos. Pero, Señor, se dice que los facciosos no tienen bienes. Y qué, ¿son solo facciosos los miserables seducidos de los pueblos más dignos de compasion que de castigo? No señor; lo son Ma-

taflorida, Eroles, Creus, Eguía y demás poderosos que tienen bienes estando entre los facciosos. Son también facciosos los que se reúnen para ayudar á los facciosos y se tapan; los que juegan al escondite, los que no teniendo ánimo para reunirse á aquellos, les contribuyen con sus bienes, aunque estén en otros pueblos ó en la corte. Se dirá: ¿y cómo se descubren éstos? Aplíquense los bienes de esta clase de facciosos á indemnizar á los perjudicados, y éstos tendrán buen cuidado de descubrirlos.

Por cuanto parece que es destino nuestro que en todas las cosas y en todos los procedimientos hayamos de hacer un formulario, y siguiendo la rutina, el espíritu de vértigo y maldita tutoría, hemos de marcar los trámites, siendo conducidos como niños con andadores y ciegos con lazarillo, voy á marcar los trámites de este juicio. No se trata aquí de un juicio de chismes y delaciones, de si dijo ó no dijo, de si calló ó de si gritó, de si es afecto ó desafecto; todo esto está despreciado: nada de chismes ni informes secretos. No se trata aquí del sacramento de la penitencia siempre respetable; porque si no se sabe lo que pasa en el acto de la confesion, tampoco se sabe lo que pasa en las juntas clandestinas ni en las alcobas. Es constante que hay casas quemadas, que hay huérfanos, que hay viudas, que ha habido robos y asesinatos: los facciosos hicieron estos daños. Otro hecho cierto. Mataflorida, Eroles, Eguía, son facciosos: esto nadie lo ignora. Pues todos aquellos que han de ser indemnizados, acudirán al juez haciendo ver su derecho. El juez no tiene que hacer más que tasados daños y bienes decir: «aplíquense á éstos los bienes del más pronto y más bien parado.» El juez que no proceda de este modo, deberá, no solo ser responsable, sino castigado ejemplarmente como cooperador de facciosos. Mataflorida se queda sin unas tierras que dicen tiene hácia Cantillana ó Constantina, y puede irse á ser Marqués ó Gran Tamerlan á la Persia. Los poderosos de la corte y pueblos, cuyo dinero invierten en seducir á los infelices y miserables, sean los primeros privados de sus bienes: de este modo consiguen dos bienes: cumplen con el mandamiento de Dios de restituir lo robado, y se les impide que cometan pecados haciendo el mal con sus bienes. Eroles se queda sin lo que tenga, y vaya á ejercer su baronía á Constantinopla: Creus sin su cóngrua y sin pension, porque éste está muerto civilmente para la Pátria, y el que civilmente está muerto, civilmente no come. Si no se usa de este rigor, resultará el escándalo más horrible, porque será lo mismo que decir: facciosos, robad, destruid, dañad cuanto queráis, porque no estais sujetos á resarcir nada: la Nacion paga, ó el daño no se paga.

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Para impugnar directamente esta medida despues de haber oido al señor Fuentes del Rio con tanto gusto, sería preciso confesar que se habia trastornado mi juicio, que no habia quedado en mí rectitud de razon, y que algun fatal influjo me hacia desconocer la hermosa verdad que adoro. Es indudable que ni la Constitucion dijo ni pudo decir que no hubiese la pena de indemnizacion: y digo pena, porque pena es para todo el que ha sido un pícaro faccioso, perder aquello en que tenia su placer; aunque, como ha dicho sábilmente el señor preopinante, más que pena es una indemnizacion que exige la justicia natural, plantada en el corazon de todos los hombres; porque yo diré siempre, con San Agustín, que habia ley, pero que los hombres no han querido leerla. En consecuencia, en todas las edades y en todos los países don-

de se haya conocido alguna moralidad segura, no se ha dudado de que el dañador, sus auxiliadores y cómplices deben indemnizar ó restituir tanto como dañaron; sin que en eso difiera la moral religiosa de la que se ha llamado pública de las sociedades. Yo no entiendo por moral evangélica sino lo que del mismo Evangelio se deduce legitimamente, porque con toda claridad se explicó su autor, y en tales términos, que el arrogante filósofo de Ginebra dice que le pasma la sencillez con que está escrito, y aquel carácter de verdad que en todo él se admira. Siendo, pues, la indemnizacion un deber expresa y claramente señalado en el Evangelio y en toda buena moral, ¿cómo es posible que yo me oponga á una cosa tan recta, tan justa y tan santa? ¿Ni podré yo creer que los autores de la Constitucion, adornados de tanta sabiduría, y teniendo los mismos principios que yo tengo adoptados, pudieran dar una disposicion que contrariase este deber de todo hombre constituido en sociedad? ¿Hay una sociedad donde el hombre pueda llamarse ciudadano, que no le castigue con una pena proporcionada á su crimen, cuando se ha apartado de aquellas leyes que la misma sociedad le impone, puesto que está demostrado que el robo es un delito, que la conspiracion es otro, ó por mejor decir, uno mismo; puesto que los conspiradores y sus agentes no han tenido otro móvil que el deseo de enriquecerse á costa ajena? Todo esto ha significado exactamente la comision en esta medida, calificándolo por delito de conspiracion; porque nada hay que no se vea en el modo de portarse los conspiradores. Que la calificacion del delito se haga de esta ó de aquella manera, convengo cuando se trata de aplicar la última pena; pero que no sea delito de conspiracion, ó que bajo esta palabra no venga también la responsabilidad, me parece que no puede negarse.

Me ha llenado de júbilo el señor preopinante cuando ha dicho que no son solamente facciosos aquellos que con las armas en la mano causan esos daños: esto es muy cierto, y deberá tenerse presente para la aplicacion de la mancomunidad, que yo convendré desde luego en que sea solidaria. Y como yo no encuentro inviolable más que la sagrada persona del Rey, de allí abajo, si de Palacio salen conspiradores, éstos y los grandes y poderosos que por mandatos, consejos ó de cualquier otro modo contribuyan al daño de la Pátria y de los particulares, deben indemnizar á éstos y á aquella; y ya hubo de hacerse en tiempo de D. Juan II y Cortés de Medina del Campo.

No obstante, mi corazon es sumamente sensible; amo la justicia, y en pós de ella iré á todas partes. Por lo mismo desearia que los señores de la comision tuviesen presente una observacion. No tratamos aquí de un delito que se haya cometido anteriormente al nacimiento de los hijos; pues en este caso, si el padre se habia hecho indigno de los derechos sociales, también lo serian 50 hijos que tuviese. Pero tal vez veremos en las filas de los leales, hijos de padres que serán facciosos, y que con pechos generosos, dignos de un buen español y de toda mi veneracion, han seguido la causa santa de la libertad, desobedeciendo los consejos de sus padres, que tanto influyen en los hijos: yo desearia que éstos fuesen los primeros indemnizados con los bienes de sus padres, pues como dice sábilmente la Constitucion, cada uno debe responder personalmente de sus obras, y no será justo que un hijo que está defendiendo la libertad pierda los bienes que no merece disfrutar su padre por estar entre las filas de los facciosos.»

Declarado el punto suficientemente discutido, propuso el Sr. *Rico* que en lugar de decirse «indemnizar á la Nacion y los particulares,» se dijese «á los particulares y á la Nacion,» porque el verdadero interés era el de que aquellos quedasen indemnizados. Contestó el señor *Canga* que en el artículo se trataba solo de establecer la base, y que sobre ella extenderia la comision un reglamento para los casos en que tuviese lugar la indemnizacion.

Votado el artículo por partes, como solicitó el señor *Ayllon*, quedó aprobado en las dos que contenia.

Leida la medida 11.ª, dijo

El Sr. **ARGUELLES**: La comision en esta medida 11.ª adopta la propuesta por el Gobierno, con una variacion sustancial en mi concepto, á saber, que la investigacion ó exámen de los expedientes del Consejo de Estado haya de hacerse por personas nombradas por el Gobierno, y no por individuos de las Córtes como éste habia propuesto. Si la comision hubiese adoptado la propuesta del Gobierno, yo la aprobaria gustoso, y la aprobaré si la comision quisiere variarla adoptando aquella en lugar de esta. Segun mis principios, las Córtes tienen la suprema vigilancia sobre todas las autoridades, porque de lo contrario seria infructuoso cuanto se previene en la Constitucion, pues solo así pueden reconocerse y atajarse los abusos. Si el Gobierno tiene idea de que en los expedientes instruidos por el Consejo de Estado para presentacion de magistraturas no se han observado las reglas prescritas en las leyes vigentes, las Córtes están en el caso de enterarse de este hecho, lo cual es justo, decoroso y conforme á los principios constitucionales; y el Consejo de Estado no puede por eso perder nada de la consideracion que merezca como cuerpo constituido por la ley fundamental, pues es imposible que, no digo yo la delicadeza, sino el mismo melindre, si se me permite esta expresion, pueda ofenderse de que esta investigacion se practique. Así, la medida del Gobierno cuando propone que una comision de las Córtes haga esta investigacion, la hallo muy arreglada, pero no así cuando la comision quiere que se haga por individuos particulares. Esta medida en cierto modo es siempre odiosa, pero desaparece en gran parte la odiosidad cuando la ejercen los Diputados de la Nacion, que tienen el encargo de vigilar en todo cuanto conduzca al bien de la Nacion misma; mas encomendada á personas particulares, varia mucho, y yo no sé si estas personas particulares, sean las que quieran, en quienes recaiga el nombramiento del Gobierno, pueden tener aquella especie de respeto anticipado y posterior á la operacion, que es necesario para asegurar su éxito. Por consiguiente, siendo esta cuestion muy sencilla, y conviniendo yo en los principios que pueden haber guiado á la comision y al Gobierno, me parece que seria fácil ponernos todos de acuerdo. Soy enemigo declarado de las visitas, no por lo que son en sí, sino porque la experiencia ha hecho ver que nunca sus resultados han correspondido á lo que se esperaba de ellas; mas ya que el Gobierno ha pedido ésta, decretése enhorabuena, pero sea como el mismo Gobierno propone, adoptando el que la visita la hagan las Córtes por medio de una comision suya, porque el que se haga por personas particulares no puedo aprobarlo absolutamente.

El Sr. **VELASCO**: No ha habido, en mi concepto, ninguna medida que no se haya impugnado por todos los medios que la ilustracion y celo de algunos señores Diputados podian excitarles. La 3.ª, la 4.ª, la 7.ª y la 8.ª, que propuso la comision, han sido atacadas vio-

lentemente, porque varios señores quisieron mirarlas como contrarias á la ley fundamental. La 9.ª, que estaba apoyada en un artículo de la Constitucion, tenia la comision fundada esperanza de que se aprobaria; pero el suceso no correspondió á esta esperanza, y las Córtes desaprobaron esta medida. Se trata ahora de la 11.ª, por la cual la comision ha querido proponer al Congreso que «á fin de dar, etc.» (*Leyó*); y se ha impugnado esta medida por el señor preopinante, á causa de que quisiera que estas personas fuesen nombradas por el Congreso. Yo estoy seguro de que si la comision hubiera propuesto que fuesen nombradas por el Congreso, se hubiera dicho que el Gobierno podia nombrarlas mucho mejor. El dia en que se trató por el Congreso de nombrar visitadores para las Audiencias, se tomó un gran interés en impedir la deliberacion del Congreso; porque he advertido que se tiene un gran cuidado en sostener siempre el interés de los gobernantes, y nunca el de los gobernados; que se inculca mucho la consideracion que se debe á los primeros, y no se recuerda que el exceso de consideracion ha sido muy perjudicial á los pueblos, que tienen un derecho á que el Congreso tome todas las medidas necesarias á fin de que las leyes se ejecuten con aquella integridad que deben tener los sugetos á quienes los mismos pueblos han confiado sus intereses. ¿Dónde está el inconveniente de que sean personas particulares las que hagan esta visita, cuando se deja al Congreso toda la accion que debe tener, pues se dice que den cuenta del resultado á las Córtes pará su aprobacion? ¿Puede la comision haber llevado más lejos su escrupulosidad á fin de que esta medida, propuesta como un bien, no venga á producir un mal? Se nombran los visitadores por el Gobierno, y es de creer que éste tendrá cuidado de no nombrar personas que no merezcan su confianza. Pero supongamos que no ha sido feliz en este nombramiento: el resultado será que se dará parte á las Córtes, y si hallasen que estas personas no habian obrado con las luces ó integridad necesarias, el Congreso tomaria entonces providencias para que los pueblos no sufriesen perjuicio alguno. Yo, pues, ruego al señor preopinante que considere que despues de haber dicho que la visita no tendrá efecto si las Córtes no la aprueban, no puede haber ningun peligro ni inconveniente en que se haga por personas particulares.

El Sr. **ARGUELLES**: El señor preopinante ha decidido una equivocacion de hecho. Yo no he dicho que las Córtes nombren los sugetos que hayan de hacer la visita, de fuera de su seno, sino que la haga una comision de las mismas Córtes, que es lo mismo que propone el Gobierno.

El Sr. **VILLABOA**: Persuadido de que la medida de que se trata es de suma trascendencia por sus consecuencias, y en la que hasta cierto punto pueden comprometerse fuertemente el decoro y aun el crédito de esta augusta reunion, deseo consignar mi dictámen en el Acta presente, para que constando en ella, descanse mi conciencia sobre tan solemne testimonio de mis sentimientos.

El objeto de la comision en esta medida es, como dice en el preámbulo, acallar el clamor general levantado contra los jueces prevaricadores; y en mi opinion, tiende tambien á llamar la suprema atencion de las Córtes, y oponer todo su poder á los esfuerzos del ciego y caprichoso favor, para que no se abra el santuario de la justicia sino á varones de probada virtud y conocida sabiduria; y en verdad que en este caso yo advierto que

las calidades prefijadas hasta ahora por las leyes, y que han de justificar los aspirantes á la judicatura, aun no son bastantes para evitar la parcialidad y el amaño. Mas abrir, como se quiere, una visita general de los expedientes instruidos en órden á las propuestas de magistrados y jueces, es, en mi modo de ver, una idea tal vez contraria al laudable objeto que la comision y el Gobierno se han propuesto.

El Consejo de Estado no es fácil que se haya olvidado del art. 251 de la Constitucion, ni de los decretos de las Córtes que prefijan las calidades que han de tener los magistrados y jueces; porque ¿cómo es presumible que haya incluido en terna á un extranjero, á un menor de 25 años y á uno que no sea abogado? Nadie que á la buena fé reuna un ordinario buen sentido, podrá imaginar un tal extravío de la razon y del tino, y aun de aquel pundonor que la clase menos elevada de la sociedad sabe respetar. Así que, para mí es tan positivo como cierto que el Consejo de Estado ha respetado las calidades legales de los propuestos: que tiene para mí toda la legal presuncion de haber obrado muy conforme á ley, y que en la materia tiene toda la fuerza de una cabal y concluyente prueba.

Diráse acaso que el Consejo de Estado no ha atendido á los afectos al sistema constitucional. Harto siento que á un amigo que acaso me escucha, eminentemente liberal y de prendas muy recomendables, no se le haya atendido, cuando esta circunstancia está recomendada por órden de las Córtes de 12 de Abril de 1812 y posteriormente por decreto de las de 1820 y 1821. Mas como quiera que no haya sido un precepto, sino una recomendacion ó excitacion, y por otra parte no se haya fijado aún bien la idea de lo que debe entenderse por adicto al sistema constitucional, la calidad de serlo no pasa de una calidad moral, sujeta á la opinion, por consiguiente opinable y no menos dudosa; resultando por necesaria consecuencia, que de no haber sido atendida esta calidad, nunca debe deducirse una responsabilidad legal. No así sucede con respecto á las calidades de ley específicas, individuales, terminantes y claras; pues que siendo las leyes siempre unas, y como no quiera respiren un santo lenguaje, cuando son preceptivas su aplicacion necesariamente es uniforme, y así habrá sido probablemente la que el Consejo de Estado ha hecho en órden á aquellas calidades.

Por otra parte, como no basta que los mismos pretendientes ó sus amigos digan que han dado pruebas de adhesion al sistema constitucional, y sea preciso por lo mismo recurrir á informes de las autoridades, no todos los que crean que les han sido favorables podrán asegurarlo: habrá habido grande divergencia en muchos, y en este caso, como no podria menos, gran dificultad en el acierto de las propuestas. De otros habrán manifestado grandísima adhesion al sistema, padecimientos por él, etc., pero al propio tiempo se habrá hecho mérito de la cortedad de sus luces; y como las Córtes conocen, no basta para ser buen juez aquella calidad sin la de perito é íntegro. Notorio es y todos saben que no solo se han pedido informes al Tribunal Supremo de Justicia, Diputaciones provinciales y Audiencias, segun lo dispuesto en el art. 31, capítulo I del decreto de 24 de Marzo de 1813, sino que se han pedido tambien á diferentes personas muy respetables con el objeto de asegurar el acierto. Mas por legales que hayan sido las propuestas, no pueden menos de tener muchos contrarios; pues siendo portentoso el número de pretendientes, y pocas en proporcion las plazas de judicatura, generalmente ha-

blando, todos aquellos que no hayan probado fortuna, necesariamente han de ser otros tantos acusadores del Consejo de Estado: cosa que no deben perder de vista las Córtes, por lo que pueda influir en el clamor general levantado contra los jueces.

Tambien llamaré su atencion hácia un punto importantísimo, y es, que en la sesion de 23 de Marzo de este año, con ocasion de los desagradables sucesos de Valencia, se presentaron varias medidas, siendo entre ellas una la de que se avocasen los expedientes respectivos á las propuestas hechas por el Consejo de Estado en órden á magistrados y jueces, y que pasasen á una comision de su seno para su exámen. La medida, pues, que se presenta, en último resultado es idéntica; y por consiguiente, si yo no estoy equivocado, pareceme que no puede ser tratada por este año, pues que lo resisten el art. 140 de la Constitucion y el 109 del Reglamento de Córtes, que pido á uno de los Sres. Secretarios tenga la bondad de leer. (*Se leyeron.*) Por la simple lectura de los dos artículos que he citado, las Córtes se habrán convencido de que en efecto no puede tratarse de esta medida toda vez que otra igual en este año mismo ha sido desechada. Tuvieron sin duda en consideracion para hacerlo, el que no se estaba en el caso de establecer una visita general en desdoro de un cuerpo respetabilísimo, que necesita tanto como todos conocen de fuerza moral para su conservacion. Tampoco pudieron perder de vista el que las pesquisas generales sobre trasgresion de ley estaban prohibidas hacerse sin licencia del Rey, segun es constante en la ley 3.^a, título XXXIV, libro 12 de la Novísima Recopilacion: y si en el anterior Gobierno se dificultaban estas pesquisas, ¿con cuánta más razon deberán dificultarse cuando nos rige un Gobierno liberal, un Gobierno representativo? Las Córtes por precision convendrán en la fuerza de esta verdad.

La comision tambien propone que se autorice al Gobierno para devolver las propuestas que no encuentre arregladas á la ley. Si se trata de las propuestas que en lo sucesivo haya de hacer el Consejo de Estado, la autorizacion no es necesaria, pues que siendo el Gobierno tan responsable como él, cuando advierta que en alguna propuesta falta requisito ó calidad legal, debe sin duda devolverla, á no ser que quiera cargar con la responsabilidad de que la ley no le dispensa; mas empero si la idea de la comision es de que las propuestas que hayan de devolverse sean las ya hechas, y en cuya virtud se hayan nombrado los actuales magistrados y jueces, cosa es en que no puede convenirse; porque si con efecto el Consejo Estado faltó en alguna propuesta á las calidades legales, claro es que resulta una trasgresion de ley, que constituye un delito, ó sea culpa ú omision, de que el Tribunal Supremo de Justicia, con arreglo al art. 261 de la Constitucion, debe conocer. Dar, pues, este conocimiento á una autoridad que la Constitucion no reconoce, no está en el poder ni en las facultades de las Córtes: además de que, así entendido el final de la medida, seria en cierto modo decretar la amovilidad de los magistrados y jueces, cuando la Constitucion la resiste.

La teoría de la institucion del poder judicial descansa sobre la más absoluta separacion é independenciam de los jueces: inamovibles éstos, seguramente que sus fallos serán más rectos é imparciales; mas dependientes del Gobierno por la autorizacion que quiere dársele, y cuando no estamos seguros de que el que hoy existe exista dentro de un mes, dos ó tres, ¿quién podrá asegurar que no pudiera influir en la terrible autoridad con-

flada al poder judicial? Peores efectos que los que produjo el funesto decreto de la interinidad de los magistrados y jueces, produciría necesariamente el acuerdo de esta medida; y ciertamente que yo no recelaré decir con el profundo Montesquieu que no miraría lejana la decadencia del Estado, pues que así es cierto cuando el Poder ejecutivo influye directa y notablemente sobre el santuario de la justicia.

He notado también que el prevaricato de los jueces y el acallar el clamor levantado contra ellos es el mal que trata de remediarse, y en verdad que el remedio no es análogo á la enfermedad. La prevaricación de los jueces tiene un remedio demasiado conocido en el decreto de 24 de Marzo de 1813. Si por desgracia algun magistrado, olvidando los sagrados empeños que con el Estado contrajo, abandonado ó perezoso, descuidare los estudios á que está consagrado, ó hiciere sentir los funestos efectos de su desaplicación y delincuente ignorancia: si diere á la amistad, á la hermosura ó al favor lo que solo debiera á la justicia, y si sobre todo admitiesen en su seno el pestilente y corrosivo virus del soborno, hiera entonces la ley con brazo seguro y fuerte, corte sin duelo y separe sin piedad el miembro corrompido, no sea que el hedor que en torno de sí esparza, inficionando á los demás, corrompa todo el cuerpo.

Ni detenga al Gobierno en tan loable empresa el recelo de hacerse odioso á los tribunales y de que le acusen de ajar su lustre y de ofender el honor y los respetos de su autoridad. Los buenos magistrados y jueces, de que por dicha no carece España (no me cuento entre ellos) desdennan otro honor y otros respetos que los que merecen manteniendo en paz y en justicia los pueblos, para quienes, y no para los que la sirven, fué instituída la magistratura. Recibirán gran placer y no menor satisfacción en que la ley haga con la toga lo que el artífice con el oro, separándole en el crisol de la escoria y de la mezcla; lejos de envilecerle y deslucirle, le da más precio y aumenta su esplendor y brillo.

Concluyo, pues, diciendo que las Córtes incurrirán en una manifiesta contradicción si hoy aprueban una medida que en este mismo año han desechado, pues que lo resisten la Constitución y el Reglamento; y que el medio de evitar las malas elecciones de magistrados y jueces es fijar más calidades á los aspirantes. Dígase, pues, que no pueda ser juez de primera instancia el que no haya ejercido la abogacía con estudio abierto por espacio de cuatro años, y que no podrá ser ascendido á magistrado sin haber desempeñado la judicatura por igual tiempo, ó el oficio de abogado por ocho ó diez, ó dedicádose á la enseñanza pública en alguna de las Universidades aprobadas. Así, y solo así, es como podrá asegurarse algun tanto el acierto en la elección de magistrados y jueces. Por lo demás, dése la extensión que se quiera al remedio de la responsabilidad y al efímero recurso de la visita, el mal no podrá ser curado en su origen ni radicalmente.

Por tanto, pues, fijen las Córtes á su tiempo las debidas calidades que han de tener los aspirantes á la magistratura y judicatura; y no perdiendo de vista las reflexiones que he aducido, dén una prueba cierta de que si bien desean atajar el mal, cierran los oídos á una pesquisa general: porque mejor es ciertamente dejar, aunque lo hubiera, algun defecto olvidado, que no envolver en las dudas crueles de la opinion el honor sagrado de un cuerpo respetabilísimo, á quien es preciso mirar con todo el carácter de nacional, pues que es hechura de las Córtes, y como protector natural de las

públicas libertades. ¡Ved, Diputados, que sois legisladores de un pueblo honrado y generoso, y que no es político debilitar la fuerza moral de una corporación de la primera gerarquía con la aprobación de la propuesta medida!

El Sr. **ISTÚRIZ**: Varias son las objeciones que se han propuesto contra este artículo: una de ellas no es esencial, porque versa solo en el modo de hacer esta visita, sobre lo cual la comisión no tendrá dificultad en admitir cualquiera variación con que se pueda conseguir mejor el objeto que se propone, y el Sr. Velasco ha contestado bastante á esta objeción; pero el señor preopinante, separándose de este principio, ha impugnado esta medida poniendo otra clase de objeciones. Ha dicho S. S., entre otras cosas, que Montesquieu dice que un Estado, cuando se adoptan medidas de esta naturaleza, está próximo á su decadencia: y yo digo que el Estado se halla, no en el estado de decadencia, sino en el punto de su disolución: por esto se han reunido las Córtes extraordinarias; por esto las Córtes se ocupan en dictar y dar al Gobierno todas las medidas que exige el estado extraordinario de la Nación para salvarla. Esta es una consideración, señores, que desde el primer día se ha perdido de vista: no nos queramos hacer ilusión, ó persuadirnos que estamos deliberando tranquilamente, pues quizá tenemos la misma tranquilidad engañosa que en Junio último, cuando se impugnó la medida de la visita que S. S. ha reclamado para hacer ver que las Córtes extraordinarias no están en el caso de volver á tratar de ella. Me es doloroso el decirlo, pero no hay una contradicción más horrorosa que la comparación del discurso que S. S. acaba de pronunciar, con los que se han oído á los demás señores que impugnaron el total del dictámen de la comisión. Una de las razones que por éstos se dió para convencer que no debían aprobarse muchas de las medidas que propone la comisión, fué la de que no podía concederse extensión de facultades á jueces corrompidos ó desafectos á la Constitución; y ahora se quiere decir que el Consejo de Estado habrá cuidado de que ocupen las plazas de las judicaturas hombres que no solo estén reconocidos por aptos, sino que sean también adictos al sistema constitucional, convirtiendo este expreso mandato de las Córtes en una simple recomendación. Su señoría debe saber que en efecto se recomendó asimismo en el año 13 á la Regencia; pero despues se ha mandado así expresamente, á fin de que no fuesen colocados en las judicaturas más que las personas que, teniendo la aptitud necesaria, fuesen adictas al sistema constitucional. El señor preopinante quiere hacer valer esta ley por una mera recomendación, como si ahora quisiera hacer la defensa del Consejo de Estado. Es necesario que S. S. y el Congreso sepan que los objetos principales de la comisión al indicar esta medida, son dos: primero, hacer desaparecer todos los jueces que por sus ideas ó intereses, no solo no favorecen al sistema, no solo le contrarían, sino que favorecen la rebelión; segundo, probar de un modo legal que, sea por ignorancia, sea por malicia ó por otra causa, los nombramientos del Consejo de Estado no han correspondido de manera alguna á sus deberes, ni á las esperanzas que la Nación tenía en los individuos que actualmente le componen. Esto debe saberse para tomar una medida enérgica cual nuestra situación reclama y las Córtes están en el caso de adoptar. Se ha dicho también que cuando el Consejo de Estado ha tratado de proveer estas plazas, ha pedido los informes correspondientes á los jefes políticos, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos; pero,

Señor, ¿dónde estamos? Yo he sido uno de los que han informado de la Diputación provincial de Cádiz, á que pertenecía, sobre los individuos que en aquella provincia eran más aptos para ocupar estos destinos: ninguno fué colocado, y al contrario, lo han sido enemigos acérrimos de la Constitución. Soy enemigo de personalidades; pero, si quisiera, podría marcar algunas de las personas que el Consejo de Estado ha colocado en las magistraturas. Entre otras muchas razones que ahora y antes de ahora se han alegado, una de ellas es que puede esta medida presentar grandes inconvenientes, porque ni el Reglamento de Cortes ni el sentido literal de la Constitución permiten que la adoptemos, y hasta se ha llegado á dudar de si nuestros poderes eran suficientes para dictar las que la Nación reclama. Cuidado, señores, á dónde vamos con esa doctrina: cuidado, señores, que esta doctrina, usada en un tiempo como el en que actualmente nos encontramos, cuando el Estado amenaza su disolución, cuando el Gobierno ha dicho terminantemente que los males de la Nación son infinitamente mayores que los que el Congreso conoce y sabe; cuidado, repito, que esta doctrina nos puede llevar muy lejos, y hasta tal punto, que tuviéramos que decir explícita ó tácitamente: «Nación, pueblo, cuida de tu salud; tus mandatarios son impotentes para ello:» y si el pueblo lo hubiese de hacer por sí mismo, los efectos serían infaliblemente más terribles, porque ante la salud del pueblo, señores, toda inviolabilidad desaparece.

El Sr. **MUNÁRRIZ**: Sin temor, sin ningún recelo de que nadie pueda ofenderme, ni á ningún Sr. Diputado, con la sola duda de que mire más por los intereses de los gobernantes que de los gobernados, entraré á combatir esta medida con la misma fortaleza con que lo he hecho siempre en asuntos de tanta trascendencia. No sé cómo el Gobierno ha podido inducir á la comisión en el error de proponer la segunda parte de esta medida. El Consejo de Estado ¿no tiene un reglamento? ¿No está sujeto á las leyes y decretos de las Cortes? Si hiciere consultas no conformes á las leyes, ¿deberá seguir su propuesta el Gobierno? ¿No se las ha devuelto éste algunas veces?

Pero vamos, señores, á ver lo que dice el Gobierno sobre las personas que deban hacer esta visita. El señor Argüelles ha dicho bastante sobre este punto, y así es excusado extenderme. El Gobierno propone que la visita se haga por individuos de las Cortes, y la comisión que se haga por sujetos nombrados por el Gobierno. ¿No se ataca en esto el decoro del Consejo de Estado, de este cuerpo moderador y respetabilísimo? Cuidado, señores, que no puede haber Constitución si todas las autoridades, desde la más alta á la más baja, no se respetan. El Consejo de Estado no puede mirar de igual modo que sus operaciones sean visitadas por un individuo nombrado por el Gobierno, ó por Diputados de las Cortes, por individuos de la Representación nacional, por la Nación misma representada por las Cortes. Así, pues, en esta parte estaría conforme con lo que ha dicho el Sr. Argüelles, si se hubiese adoptado la propuesta del Gobierno; pero el Sr. Villaboa ha dicho que esta medida está desaprobada en la legislatura anterior, y que es expreso por la Constitución y por el Reglamento que una medida desaprobada no puede volver á discutirse ó á aprobarse en un mismo año. Mas, Señor, que la Nación está rodeada de peligros, como dijo ayer el Sr. Ministro. ¡Ojalá que no fuese cierto! Pero en estas circunstancias críticas y extraordinarias ¿nos hemos de ocupar en medidas que no traigan un pronto y eficaz-

simo remedio? A un enfermo que esté en la agonía (no creo que se halle en este caso la Nación española, que en tiempo de la guerra de la Independencia supo resistir al dominador de toda la Europa), ¿se ocupará el médico en recetarle el régimen dietético para el tiempo de la convalecencia? Si las circunstancias son críticas, ocupémonos solo en remedios que puedan surtir su efecto, no digo en una semana, sino en algunos días; pero el remedio de la visita ¿cuánto tiempo no necesita para surtir su efecto? Veamos cuál ha sido el efecto de la visita mandada hacer en las causas de conspiración: hemos visto en los papeles públicos el resultado de tres ó cuatro; y en una de las causas que movieron más ruido en la corte, hemos visto un extracto favorable á la parte de la cual se tenían sospechas. Pues, Señor, si después de tantos meses no hemos visto más resultado de la visita decretada, ¿será este el remedio pronto y eficaz que la Nación necesita? Prescindiendo, pues, de si el Consejo de Estado ha obrado bien ó mal, ó de si se ha dejado engañar ó no de informantes pícaros, yo solo diré á las Cortes que el remedio que se propone no es pronto, y que esto solo basta para que, en mi concepto, no nos ocupemos ahora de él.

El Sr. **CANGA**: No dejaré de ser motivo, acaso de censura, el tomar la palabra yo en este desagradable asunto; pero soy Diputado é individuo de la comisión, y ante estos respetos desaparecen los que van unidos á las condecoraciones con que me honro. Tomo la palabra para apoyar una medida que viene propuesta por el Gobierno, y contra la cual se han empleado argumentos que no son del caso. No puedo menos de alabar á uno de los señores preopinantes, porque en su discurso brilla aquel respeto que siempre profesan los magistrados á las clases superiores de quienes depende su fortuna: tengo la desgracia de no pertenecer á una clase tan respetable, y por eso seré más libre en lo que voy á decir. La medida que se propone no ataca el honor ni el respeto que se merezca el Consejo de Estado; es necesaria para la salvación de la Patria, y á esta necesidad se deben sacrificar todas las consideraciones humanas. El Gobierno presenta esta medida, no solo por las razones que se han alegado públicamente, sino por las que ha expuesto en las conferencias que ha tenido con la comisión. Se duda acaso de si las Cortes extraordinarias tienen facultad para entrar en la discusión de este negocio; pero sin fundamento, porque esta medida no la presentan los Diputados, sino el Gobierno, y acuérdesse el Congreso de que hace unos días que ha decidido pertenecerle todo lo que viniere de parte del Gobierno, aunque no se halle expreso en la convocatoria. No olvidemos, Señor, la historia de esta discusión. Varios señores Diputados tuvimos el honor de hacer el día 9 una proposición, que mereció la aprobación de las Cortes, para que el Gobierno señalase las causas de los males que padecemos y su remedio: el Gobierno las presenta, y entre ellas indica la conducta desacertada de esta corporación. Se dice que la visita no la debía hacer el Gobierno, sino individuos de las Cortes. El Gobierno por delicadeza lo propuso así; y por la misma, y por razones que no se ocultan, la comisión opina que se confíe al Gobierno. Con el fin de eximir al Consejo de Estado de los efectos de la visita, se ha dicho que era un cuerpo nacional y moderador. Pero ¿tenemos acaso Senado? ¿Tenemos Cámaras? El Consejo de Estado es un cuerpo consultor del Rey, y no de la Nación. ¿Acaso tiene derecho para impedir las determinaciones de las Cortes? ¿Puede suspender una ley? El poder judicial es más res-

petable que el Consejo de Estado, y sin embargo se le ha sujetado á una visita porque se creyó necesaria. Se ha llamado al Consejo de Estado cuerpo nacional. ¿Y qué tiene de nacional, más que la propuesta que de sus individuos hacen los que componen el único nacional que hay en España? Más nacional, si se quiere, era la Junta del Crédito público, porque la propuesta era del Rey y el nombramiento de las Córtes, y sin embargo se la ligó á una visita.

El Consejo de Estado ha debido cumplir exactamente lo que mandan las leyes con respecto á las propuestas para plazas de judicaturas. Uno de los requisitos que aquellas exigen es el que los propuestos hayan dado pruebas positivas de adhesión á la libertad constitucional é independencia de la Nación. Este es un precepto, y no, como alguno ha dicho, una recomendación. Las Córtes deciden y no ruegan, decretan y no recomiendan. Acuérdesse el Congreso de que cuando se trató de dar preferencia á los que gozaran sueldo ó pensión, mandó que además se exigiese la calidad indispensable de haber dado pruebas positivas de adhesión al sistema constitucional y á la independencia de la Nación. Y el Consejo ¿lo ha cumplido? La voz pública dice que éste ha propuesto por magistrados á muchos desprovistos de tan dignas calidades. Si el señor preopinante conoce á un sugeto desatendido por ocurrencias casuales, yo pudiera citar otros que con tachas han sido consultados. Sé que de algun tiempo á esta parte se han pedido los informes de que ha hecho mérito; pero también sé, como ha indicado el Sr. Istúriz, que muchos sugetos que los han obtenido favorables no han sido propuestos; sé que otros que han sido denunciados por las corporaciones populares por desafectos al sistema, han logrado preferencia sobre los patriotas, y sé que el Consejo ha desatendido aquellos informes por atribuir á las autoridades populares desafección, pasiones y miras torcidas ajenas de su carácter. ¡Desgraciado pueblo, que siempre ha de ser mirado con ceño por los mismos magnates á quienes mantiene y honra! La visita en cuestión se dirige á indagar si los propuestos para magistrados tienen las calidades que la ley requiere. Se dice que esta no es de las medidas enérgicas, prontas y eficaces que reclama la Pátria. En esta parte quizá estaré de acuerdo con los que así opinan, aunque acaso discreparemos en el fondo. He tenido que hacer un sacrificio en convenir con la comisión en este punto, quiero decir, en limitar la propuesta puramente á la visita, porque yo hubiera propuesto que se declarasen nulos todos los nombramientos hechos sin haberse acreditado las calidades indicadas: pero la comisión, más sábia que yo, limita su celo á proponer que se examinen las propuestas para que en virtud del resultado se tome la providencia que parezca más justa. No echemos en olvido la reflexión que hizo ayer un Sr. Diputado impugnando la suspensión del *Habeas corpus*, ó séase de las formalidades para el arresto, de que habla el art. 308 de la Constitución. Dijo que no se podía decretar dicha suspensión, porque los jueces no merecían la confianza pública; y ahora que se trata de averiguar si son acreedores á ella, se ponen mil objeciones para impedirlo. Se dice que el Gobierno ha tenido y tiene facultad para devolver al Consejo las consultas que no hallare arregladas á la ley. Pues yo digo que no la tiene, y que el Consejo no se la reconoce; y si me fuese permitido, añadiría un dato que S. S. no podrá tener á la vista, porque le ha confiado á la comisión el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, á quien rogaría, si estuviera presente, que le descubriera para desengaño

de los que se oponen á la medida; pero dia vendrá en que se explicarán todos los motivos que ha habido para proponerla. El Consejo de Estado se cree con mayores facultades que las que la ley le señala: sí, se cree encumbrado más allá del término que ésta le ha fijado, y aun quizá aspira á las prerogativas é inmunidades que tenían los viejos y caducos Consejos de Castilla é Indias.

El Sr. **VILLABOA**: Para rectificar un hecho. El Sr. Canga encontrará en el proyecto de la Constitución la voz de que he usado cuando he llamado al Consejo de Estado nacional.

El Sr. **CANGA**: Aunque respeto mucho al autor del referido proyecto, al cabo no veo más en él que el dictamen de un particular, y por lo mismo no confirma lo que ha dicho S. S., ni puede usarse de una expresión que la Constitución no reconoce.

El Sr. **CANO**: Impugno esta medida porque estoy persuadido de que ha de producir unos resultados opuestos á los buenos deseos que han animado á la comisión al proponerla. Se dice que para la completa tranquilidad y confianza de los pueblos en las personas que administran justicia, conviene que se abra una visita de los expedientes en cuya virtud ha hecho las propuestas el Consejo de Estado; pero si de esta visita resultare, como verosíblemente es de creer, que algunos jueces y magistrados carecen de las cualidades prescritas por los decretos y leyes vigentes, y cuando se publique y entienda en los pueblos que algunos ó muchos de sus jueces ó magistrados carecen de las cualidades requeridas por la ley, ¿confiarán en sus providencias? ¿Se persuadirán de que la justicia ha sido bien y fielmente administrada? Es claro que no; y es igualmente claro que no solo no han de confiar en ellos, sino que se han de persuadir de que cuantas providencias y sentencias hubiesen dictado son en sí irritas y de ningun valor. Así, se ve que la medida ha de producir efectos contrarios á los que la comisión se ha propuesto, y que se abrirá tal vez la puerta á pleitos que ya estaban concluidos, porque se podrá alegar que no era juez competente el que estaba falto de los requisitos y circunstancias que la ley previene. Si la visita de expedientes no tuviese otro objeto que el de exigir la responsabilidad al Consejo de Estado por haber propuesto para la magistratura sugetos que carecen de las cualidades que la ley previene, yo convendría gustosísimo con la medida, porque justo es que los que faltan á lo que la ley previene, sufran la pena correspondiente á los que infringen la ley; pero la medida me parece que tiende á más. Si así fuese, yo quisiera saber si á los jueces y magistrados se les puede hacer responsables de la falta de alguna de las cualidades requeridas; y me persuado desde luego de que no, porque á ninguno se le puede hacer responsable de hechos ajenos: así que, solo el Consejo de Estado debe ser el responsable de las faltas. Por otro concepto, si con arreglo á lo prescrito por la Constitución los jueces y magistrados no pueden ser suspensos sino por acusación legalmente intentada, ni removidos sino por sentencia legalmente pronunciada, claro es que aun cuando al tiempo de las propuestas les faltase alguna de las calidades, esta no es suficiente causa para que puedan ser suspensos ni removidos, y que para ello seria necesario ocurrir á los únicos medios que la Constitución prescribe y llevo indicados. Por lo que soy de opinión que esta medida debe devolverse á la comisión para que la presente en otros términos y solo con el objeto de exigir la responsabilidad al Consejo de Estado.

El Sr. **RUIZ DE LA VEGA**: Al tomar la defensa

de la comision en el presente artículo, no entraré á rebatir el pormenor de todas las razones de los señores que han impugnado esta medida, porque mis dignos compañeros de comision lo han hecho suficientemente. Uno de ellos, el Sr. Velasco, no ha podido menos de manifestar su extrañeza con motivo de la terrible impugnacion que sufren todas las medidas propuestas por la comision: á mi ciertamente no me la ha causado, porque el conocimiento que presta la experiencia de lo que suele suceder en las discusiones me hacia recelar que sucederia lo mismo que está pasando. Entre los varios argumentos que se han hecho contra esta medida, han llamado particularmente mi atencion aquellos que han partido del respeto y veneracion que se debe al Consejo de Estado y á la magistratura; pero con especialidad me movió á tomar la palabra la observacion hecha por el Sr. Cano acerca de los inconvenientes que pudiera producir esta medida; sobre lo cual no puedo menos de hacer algunas reflexiones generales, para remover de una vez la funesta impresion de tales argumentos, que por desgracia se repiten á cada instante. Ya he dicho otras veces que cuando se trata de materias de tanta importancia como la de la presente medida y todas las demás de este dictámen, es necesario comparar los convenientes y los inconvenientes, porque sin esta exacta comparacion no será posible que nosotros nos acerquemos á la resolucion más acertada. Las ideas de falsa conveniencia son acaso el manantial más fecundo de los errores é injusticias. Hablo con las mismas palabras del célebre publicista Marqués de Beccaria. Falsa conveniencia es aquella que antepone los inconvenientes particulares al inconveniente general: lo es aquella que sacrifica mil ventajas reales, presentes y efectivas, al inconveniente imaginario, meramente posible ó de una consecuencia parcial, que quitaria á los hombres el fuego porque quema y el agua porque anega: lo es aquella que descuida motivos presentes, los únicos que con eficacia deben obrar, para dar fuerza á motivos distantes, cuya impresion es flaca y de menos valor; y finalmente, falsa idea de conveniencia lo es tambien aquella que sacrifica la cosa al nombre, dividiendo el bien público del bien de los particulares. Parece que se nos quiere aterrar mirando solo los inconvenientes que pueden producir estas medidas, y pintando los males posibles con tales colores, que nos hagan olvidar los males reales que se tocan, están presentes y tienen una eficacia y un influjo más inmediato. Siempre he observado con dolor esta tendencia á combatir providencias saludables por temor de los abusos ó inconvenientes que acaso puedan producir; y cuando oigo discurrir de este modo, pretendiéndose una perfeccion suma y sin tacha, no puedo menos de persuadirme de que la idea del que así discurre es el dar por medio de las leyes á una muchedumbre de seres sensibles y libres en sus modos de obrar la misma simetría, órden y completo ó absoluto concierto que se da á la materia bruta é inanimada por medio del arte; pero esto es un absurdo. Toda ley, por discreta y sábia que sea, es susceptible en su ejecucion de algun género de desórden: lo demás es una quimera; pues si aun en las mismas cosas que se rigen puramente por las leyes naturales, que son las más simples, sábias y constantes, se observa algunas veces algun género de turbacion ó desórden, ¿qué extraño será que en las hechas por los hombres se observe alguna falta de concierto y órden? Así que, porque haya algunos inconvenientes posibles y tal vez muy distantes, inconvenientes que quizá felizmente no llegarán á ocurrir,

¿hemos de dejar de adoptar las providencias que ofrecen ventajas reales y efectivas, ventajas del momento y que podamos sentir inmediatamente? Esto me parece que seria una insensatez. Señor, el Gobierno, como ha dicho muy bien mi digno compañero de comision el señor Canga, en las conferencias muy dilatadas que ha tenido con la comision á fin de hacer ver la necesidad de la medida de que se trata, manifestó, y del modo más categórico, la necesidad y perentoriedad de ella, así como de las demás que se han propuesto. El Gobierno ayer, por boca del Secretario de Gracia y Justicia, anunció cosas que ciertamente debieron estremecernos; y con este motivo no puedo menos de hacer una reflexion.

Siempre he visto establecida como una doctrina inconcusa en estas materias que estriban en noticias y datos positivos de hechos, que el dictámen del Gobierno debe mirarse con toda confianza y autenticidad, como que es el único depositario de los documentos de oficio. Así es que aun cuando existia un Gobierno que nos tenia adormecidos sobre la orilla misma del precipicio, y que nos mantuvo en este estado de ciega confianza hasta el mismo momento en que íbamos á ser abismados en él y á ser presa de nuestros enemigos, á la menor insinuacion se accedia á cuantas medidas proponia, y aun se reputaba como un escándalo el oponerse á alguna de ellas; y ahora que el Gobierno con la mayor libertad y franqueza está manifestando los peligros que nos amenazan; ahora que no nos adormece; ahora que nos estimula á salvar la Pátria; ahora se desconoce ya aquella máxima tan generalmente inculcada, y ahora es cuando se opone una resistencia tan terrible á todas las medidas que el mismo Gobierno propone como necesarias, y de cuya conveniencia inmediata no puede dudarse. Confieso que á mí me aturde esta reflexion. ¿Y será posible que unas consideraciones parciales de esta clase nos conduzcan otra vez al bordo de un precipicio cuyo fondo no nos es dado sondear? ¿Será posible que reverencemos tanto la sombra de la dignidad de una corporacion ó de un alto funcionario, y que desoigamos los clamores del pueblo, que por todas partes grita: «representantes de la Nacion, salvad la Pátria?» ¿Y nosotros aún presumiremos salvarla deshechando los medios de conseguirlo? Un fenómeno muy extraordinario seria para mí el que con esta conducta saliese la Nacion de sus apuros: nunca las Naciones se han salvado en circunstancias tan críticas por los medios comunes y ordinarios establecidos para tiempos tranquilos y de reposo. La historia nos lo enseña así; y si nosotros nos empeñamos en no escuchar sus lecciones, la Nacion se salvará, si se salva; pero se salvará por sí misma, del mismo modo y con la misma gloria que lo ha hecho ya en circunstancias no menos difíciles: se salvará, pero á la manera que se salva aquel enfermo á quien abandonó el facultativo ó no acertó á propinarle los remedios convenientes, que suele volver sin embargo del grave insulto que le acometiera, por medio de un sacudimiento espontáneo de la naturaleza. Yo por mi parte levantaré sin cesar mi voz y clamaré por que se adopten cuantas medidas juzgue necesarias para el bien y salvacion de mi Pátria; y teniendo por tal la que hoy se presenta por la comision á propuesta del Gobierno, no puedo menos de rogar á las Cortes que la aprueben.»

Declarado el punto suficientemente discutido, se aprobó la medida; y leida la 12.^a, dijo

El Sr. VALDES: Antes de entrar en la discusion, quisiera hacer una pregunta, y es acerca del sentido de la palabra *discrecionalmente* de que se usa en este ar-

título; porque yo desearia saber si aprobada esta medida como se propone, podrá el Gobierno, si quiere, disolver todo el ejército y organizarlo de nuevo.

El Sr. Secretario del Despacho de la **GUERRA**: El Gobierno se ha visto en la necesidad de separar provisionalmente del mando de algunos cuerpos los jefes, sustituyendo en su lugar otros de su confianza, que han correspondido á sus deseos y hecho adquirir á los cuerpos aquella fuerza moral necesaria; pero considerando que esta sola medida no podia llenar el objeto, pues que á los suspensos les siguen sus ascensos con perjuicio de los que se están batiendo con los facciosos, que no pueden ascender en propiedad á los empleos que les corresponden en justicia, se ha visto en la necesidad de proponer que quede sin efecto ó se suspenda por ahora lo que dispone el art. 71 de la ley orgánica, concediéndosele la autorizacion que propone esta medida.

El Sr. **INFANTE**: El Sr. Secretario de la Guerra ha indicado la razon que tiene el Gobierno para pedir á las Córtes que se suspenda por algun tiempo el art. 71 de la ley orgánica del ejército; artículo que de resultas de algunas dudas ó dificultades que ocurrieron al Gobierno, modificaron las Córtes anteriores en su decreto de 2 de Enero de este año. El Sr. Secretario de la Guerra ha insinuado ya las razones que han tenido el Gobierno y la comision para proponer esta medida, contra la que he tomado la palabra por juzgarla insuficiente. La ley orgánica sábiamente dispuso que no se pueda privar á ningun militar de su graduacion y sueldo sin causa legalmente intentada y sentenciada; mas aquella ley habla ó se dió solo para circunstancias ordinarias, á fin de atar las manos al Gobierno para que no cometa en el particular arbitrariedades, que por desgracia no han dejado de cometerse en nuestros dias, y no há muchos meses; pero en el caso de guerra necesita el Gobierno hallarse revestido de facultad bastante para separar del mando á aquellos oficiales que, faltos de valor y de las cualidades que deben constituir un buen militar, no son á propósito para continuar mandando, y para sustituir en su lugar á aquellos que respiran en todas las Naciones un amor decidido á la Pátria y á la gloria. Convencido de esta necesidad y de que sin este estímulo no puede existir ejército, creo que la comision ha andado escasa en la facultad que concede al Gobierno. El ejército español no necesita que yo me ponga ahora á enumerar sus glorias, adquiridas, tanto en la guerra de la Independencia, como en la actual de libertad; pero entonces y ahora, ahora y entonces, ha habido en él un corto número de jefes y oficiales que han procurado ponerse en salvo en cuarteles de seguridad y no correr ningun peligro. Con respecto á éstos quiero yo que se autorice al Gobierno para retirarlos, quedando sin fuerza el artículo de la ley orgánica; porque de lo contrario, sucederá que el Gobierno removerá á un jefe de batallon, y mañana por haber otro Ministro podrá lograr el volver á mandar el mismo batallon de que fué expellido ó separado por inepto ó cobarde, suscitándose con este motivo contiendas y desazones muy sensibles. Aun quiero más, y es que esta medida no se limite solo á los jefes, sino que comprenda á los oficiales, y que el Gobierno quede plenamente autorizado para retirar á estos tambien, segun le parezca: de otra manera sucederá que el ejército no conservará el noble entusiasmo que le anima, y que esa juventud briosa de oficialidad, que tantos dias de gloria está dando á la Pátria, se verá privada de los ascensos que tan de justicia le corresponden, mientras que los pocos que huyen de los peligros

no serán perjudicados en su carrera. Así que, yo rogaria á la comision tuviese á bien admitir la siguiente adición: (*La leyó, y era relativa á que el Gobierno pudiese conceder libremente toda clase de retiros.*) Con este motivo recordaré al Sr. Secretario del Despacho de la Guerra, á pesar de que es regular que S. S., como tan entendido en la materia, lo tendrá ya presente, que con respecto al nombramiento de coroneles se tuviese en consideracion: primero, que habiéndose decretado por las Córtes que no haya brigadieres, esta clase es la que ha de subir á generales; y segundo, que ignorándose la organizacion que deberá darse á los cuerpos en la legislatura inmediata, debe caminarse con pulso y economía, no sea que tal vez nos encontremos entonces con un número excesivo de coroneles que no tengan las calidades y disposiciones necesarias para ascender á la clase inmediata de generales.

El Sr. Secretario del Despacho de la **GUERRA**: Es claro que aprobada por las Córtes esta medida, el Gobierno podrá nombrar en propiedad los comandantes que están puestos en comision, y retirará á los propietarios suspensos ó depuestos por falta de energía ó disposicion; ó si fueren sus defectos susceptibles de formacion de causa, se la mandará formar por si resultare deber ser retirados sin sueldo. Así que, el Gobierno tiene por excusada la adición sobre retiros; y en cuanto á lo que ha dicho el Sr. Infante sobre la clase de coroneles, el Gobierno piensa en hacer á las Córtes una propuesta acerca de la organizacion del ejército, y entonces podrá el Congreso tomar en consideracion este punto.

El Sr. **INFANTE**: Quisiera que el Sr. Secretario de la Guerra contestase en cuanto á lo que he indicado acerca de que se incluyan en esta medida tambien los oficiales.

El Sr. Secretario del Despacho de la **GUERRA**: Por supuesto que deben estar comprendidas todas las clases de oficiales.

El Sr. **BENITO**: Impugno esta medida por no necesaria, y voy á ver si en breves razones puedo probarlo. Que el Gobierno esté autorizado para separar los oficiales y reemplazarlos provisionalmente por otros que tengan las calidades necesarias para el buen desempeño, lo creo arreglado á la ley; mas el que pueda retirarlos discrecionalmente, sin informe alguno, sin más requisito que su voluntad, y sin probarse de ningun modo su ineptitud física ó moral, creo no es conforme al decreto de las Córtes extraordinarias de 2 de Enero de 1822, que dice: (*Lo leyó*) Y en otro artículo añade: (*Lo leyó*). Por lo que acabo de leer, van las Córtes que el Gobierno está autorizado para dar libremente su retiro, con el sueldo que corresponda á sus años de servicio, á todos aquellos jefes ú oficiales que considere ineptos física ó moralmente, precediendo para ello la formacion de un expediente instructivo; expediente que se puede despachar en pocos dias con presencia de las hojas de servicio. Así que, impugno esta medida por no necesaria, é igualmente la adición del Sr. Infante.

El Sr. Secretario del Despacho de la **GUERRA**: El Gobierno, al proponer esta medida, tuvo presente el decreto de las Córtes que ha citado el Sr. Benito; pero creyó que no bastaba, porque por desgracia la mayor parte de los delitos que en el dia obligan á separar á los jefes y oficiales no pueden ponerse en claro por medio de esos expedientes instructivos, y así el Gobierno necesita de nueva autorizacion para poder retirar á estos individuos mediante los informes particulares que tome con la circunspeccion correspondiente.

El Sr. **VALDÉS** (D. Cayetano): Hice antes una pregunta con el ánimo de que las Cortes resolviesen con conocimiento; y efectivamente me he convencido por la discusión de que este artículo no presenta claras las ideas que se han anunciado. El Gobierno ha estado siempre autorizado para separar los jefes militares de sus destinos; pero es necesario distinguir entre destinos en comisión y grados ó empleos. La medida que se propone parece dirigida á restablecer el sistema primitivo de la milicia, y á que el Rey á su antojo ponga los jefes militares que quiera; pero esto ni es conforme á la ley orgánica, ni á la nueva ordenanza que se está discutiendo. Dígase claro si se quiere que el ejército vuelva al antiguo sistema, en que el Rey podía hacer y hacer virey de Méjico á un paisano ó al Arzobispo, que era por lo general en quien recaía el vireinato en caso de muerte del propietario. Dígase claro: «la Nación dará tantos soldados y tanto dinero para el ejército, y el Gobierno corra con poner los jefes y oficiales bajo las contratas ó compromisos voluntarios que concertare con ellos,» y no se hable más de antigüedades ni ascensos. Sepa el que se dedica, por ejemplo, á la artillería ó ingenieros, que si ahora precedido exámen llega á teniente, y con buena salud puede esperar llegar á ser jefe por escala rigurosa, en adelante no habrá ya ningún género de escala, y podrá el Rey, si lo tiene por conveniente, nombrar coronel á un alférez; pues este es el sentido de la palabra «discrecionalmente» entre los militares, y así es que se dice «rendirse á discreccion» cuando el rendido se pone á la voluntad absoluta del vencedor. Si se dice que se trata solo de una autorización por tiempo limitado, yo creo que debe entenderse para siempre, porque continuamente ocurrirá que hayan de separarse jefes, pues la carrera militar es tal, que hoy se nombrará uno, y dentro de ocho días habrá que separarle por no haber llenado las esperanzas del Gobierno. Vótese, pues, el artículo con conocimiento, y sepan los militares que desde hoy en adelante puede el Gobierno separarlos ó retirarlos cuando guste.

El Sr. Secretario del Despacho de **ESTADO**: El señor Valdés ha dado toda la amplitud que puede imaginarse á esta medida. De lo que aquí únicamente se trata es de derogar momentáneamente el art. 71 de la ley orgánica del ejército, por el cual ningún oficial puede ser separado de su empleo y graduacion sin formacion de causa, á fin de que el Gobierno pueda, no quitar la graduacion militar, sino separar y retirar de servicio, con el sueldo que corresponda á los años de servicio, ó con ninguno. El Sr. Benito ha hablado de la formacion de un expediente instructivo que debe preceder á aquella providencia; mas el Gobierno cree que muchas veces este expediente es impracticable, por cuanto pueden ser tales los motivos, que se escapan, digámoslo así, al procedimiento judicial. Señor, las circunstancias actuales exigen muchísima circunspeccion y tino para no dar el mando militar á ciertos hombres, y por eso el Gobierno, interesado en que la nave del Estado marche, pide autorizacion para remover los oficiales militares; autorizacion de que el Gobierno no se valdrá para trastornar el orden establecido en la milicia, ni para poner,

como se ha temido, un alférez ó subteniente por coronel de un cuerpo.

El Sr. **BENITO**: No es judicial el expediente que yo he indicado, y que debe preceder, segun el decreto de las Cortes, á la suspension, remocion ó retiro de un oficial; es solamente instructivo.»

Declarado el punto suficientemente discutido, se aprobó la medida, en estos términos:

«Se autoriza al Gobierno para que pueda remover ó retirar discrecionalmente á los jefes y oficiales del ejército permanente ó Milicia activa, sin que por esto se entienda queda alterado el orden de ascensos establecido »

Se suspendió la discusión.

Se mandaron pasar á la comision las adiciones siguientes:

Del Sr. Ayllon:

«Para la ejecucion de la medida 10.^a, aprobada hoy por las Cortes, pido se declare que la indemnizacion debe hacerse á todos los que hayan sufrido perjuicios por los facciosos y demás conspiradores, y que la indemnizacion á la Nacion no se verifique hasta que esté completa la de los particulares; como asimismo que para evitar dudas y entorpecimientos, se determinen los límites de la mancomunidad, expresándose si se ha de extender á todas las provincias en comun, y cómo se ha de asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios, impidiendo que se distraigan con los bienes de los conspiradores.»

Del Sr. Gomez, á la medida 8.^a:

«Pido á las Cortes que despues de las palabras «á los individuos de los Ayuntamientos» se añada: «precediendo la imposicion de multas proporcionadas.»

Del Sr. Gomez Becerra:

«Pido que en la medida 11.^a, despues de la palabra «jueces» se añada «y magistrados.»

Habiendo la oficina de la redaccion de este *Diario* presentado en carácter comun el discurso pronunciado en el dia anterior por el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, en cumplimiento de la resolucion de las Cortes aprobando la proposicion del Sr. Adan, propuso éste que se pasase á la comision especial para el uso que tuviese por oportuno. Así se acordó.

Anunció el Sr. *Presidente* que en el dia inmediato se discutiria el dictámen de la comision de Guerra proponiendo reglas para llevar á efecto el reemplazo del ejército, y se continuaria la de las medidas propuestas sobre el estado de la Nacion.

Se levantó la sesion.